

# LOE: EL PEOR DE LOS PACTOS POSIBLES

Colectivo Baltasar Garcan

**D**esde que apareci el primer borrador de la LOE, que se postulaba como continuadora de las anteriores reformas y respetuosa con las instituciones e intereses que las haban condicionado, sabamos que su vuelo iba a ser corto y autolimitado. Pocas ilusiones caban para quienes, en consecuencia con el impulso democrtico expresado en las elecciones del 14 de marzo, aspirbamos a ser testigos y partcipes de un verdadero cambio de rumbo en la educacin. Al punto en que hemos llegado, y con la triste experiencia acumulada, la nica reforma creble no podra ser otra que aqulla capaz de dar un audaz golpe de timn para invertir el proceso destructivo de la enseanza pblica, propiciado en buena parte por el conjunto de leyes y desarrollos de la anterior etapa socialista, y acelerado con las iniciativas, "de accin y omisin", llevadas a cabo por los gobiernos de Aznar.

Aparte de la habitual literatura sobre los grandilocuentes principios y objetivos, en los que todas las reformas dicen inspirarse, el mensaje era claro en lo sustancial. De un lado, el gobierno daba garantas a la Iglesia de mantener y respetar los antidemocrticos Acuerdos suscritos en 1979 con el Vaticano sobre la presencia de la Religin en la escuela y su financiacin. De otro, la ampliacin de los conciertos a la Educacin Infantil quera ser, igualmente, una seal inequvoca para el sector privado de que no slo no se cuestionaba el sistema dual vigente, sino que se le abran nuevas posibilidades de avance y desarrollo. No eran nimias tales concesiones de partida.

Se trata justamente de los pilares (por dems, de clara herencia franquista) en los que se han sustentado la divisin, segregacin y profunda desigualdad que definen a nuestro sistema educativo, hacindolas prevalecer por encima de cualquier invento "pedaggico" o circunstancial revoque de fachada.

De cara a la base social que haba echado al PP del poder para abrir paso a sus propias aspiraciones democrticas, slo se apreciaban ambiguos guinos referentes a un mayor control de los conciertos y de los procesos de escolarizacin, a cierta flexibilidad en las estructuras del sistema (diagnsticos, refuerzos, promocin,...) para paliar los preocupantes ndices de fracaso escolar, a propuestas de carcter hbrido que pretendan atemperar los excesos ms llamativos de la LOCE (alternativa "religiosa" a la Religin, designacin administrativa de los directores, itinerarios segregadores,...).

Esa autolimitacin y falta de audacia democrtica, si, por una parte, provocaba la confusin y desmovilizacin de la mayora social defensora de lo pblico, por otra, era percibida por la derecha como claro indicio de debilidad, que la animaba a pasar de nuevo a la ofensiva. Se trata de una experiencia muy vieja, como para que alguien se haga el sorprendido. Cuando la reaccin conservadora, incluso en una correlacin de fuerzas desfavorable, ve que, despus de temerse lo peor, sus privilegios son mantenidos, y son respetadas como justas y democrticas sus razones sectarias, no tarda en crecerse y, en nombre de esos "derechos" reconocidos, en empearse en llevar su propia y perversa lgica hasta el final.

Slo la desvergenza y la osada, alentadas por la fragilidad mostrada por el gobierno, pueden explicar el bochornoso espectculo de agresividad y demagogia escenificado por la derecha y la reaccin clerical en los ltimos meses. Hemos asistido atnitos a un montaje, como en los mejores tiempos del fascismo y del nacional-catolicismo, en el que las palabras perdan su propio significado, los hechos aparecan en su realidad opuesta, y la mentira, repetida al unsono por enfervorizadas gargantas y medios sin escrpulos, se trasmutaba en sacrosanta e inapelable verdad. Es obligado hacer un breve repaso a las "razones" esgrimidas.

"Por la libertad de enseanza" decan manifestarse los obispos, cuando esa fue divisa liberal contra el monopolio, primero, y la constante intromisin, despus, de la Iglesia

en la educación, al pasar ésta a ser considerada como bien público, derecho universal y, en consecuencia, independiente de las creencias personales, para así respetar la libre conciencia de todos los ciudadanos. Ahora, esa misma consigna se ha visto enarbolada justamente para lo contrario: para defender de nuevo el acotamiento de parcelas educativas confesionales, justificar la discriminación ideológica, desarrollar los mecanismos privatizadores de la enseñanza y provocar mayores cotas de desigualdad, reclamando, con toda desfachatez, que todo ello sea sufragado con fondos públicos.

"Libre elección de centro" era, a fin de cuentas, su reivindicación más concreta, por entender que podía verse amenazada con la nueva ley. Una vez legitimadas por la LODE las subvenciones estatales a los centros "libremente" creados por la iniciativa privada ("social", dicen ellos), se trata ahora de elevar su correlato natural, "la libre elección de centro" (para aquellos que realmente pueda elegir), a principio democrático por encima de cualquier otro. Invocándolo, quieren estos nuevos "liberales" eliminar la enseñanza como "servicio público", limitar la escuela estatal a funciones de beneficencia y marginalidad, convertir la educación en un terreno más regido por las leyes del mercado, en función de lo cual exigen que no haya más condición para los conciertos y su ampliación que la simple demanda.

En el colmo del sectarismo, la Conferencia Episcopal y sus fieles seguidores no se conforman con la aberrante presencia del adoctrinamiento confesional en los centros, tanto públicos como privados, sino que pretenden alzarse con la exclusiva de la educación en "valores morales", negando incluso al Estado democrático y laico (debería ser en plenitud las dos cosas) la competencia para formar al conjunto de los futuros ciudadanos, de todas las creencias y culturas, en el respeto a los mismos derechos humanos, en los valores democráticos que permitan una mayor cohesión social y el esfuerzo compartido por un proyecto común de ciudadanía.

El resto de banderas levantadas para acompañar los auténticos intereses en juego (calidad de la enseñanza y filosofía del esfuerzo contra el fracaso escolar, respeto y recono-

cimiento al profesorado, etc), no tienen, a la hora de la verdad, más valor que el de la grauidad de las palabras y la demagogia fácil y sin consecuencias. Quienes tan obsesionados están en preservar y ampliar su coto privilegiado, poco interés deben tener en la calidad del sector público, de cuya degradación se alimentan. Menos creíble resulta su hipócrita preocupación por el fracaso escolar de aquellos alumnos que ellos mismos no quieren en sus centros. La insistente reivindicación de mayor "autonomía" económica, organizativa e ideológica, para desarrollar el "carácter propio" y diferenciado de su oferta educativa, nada tiene que ver con la lucha por unas condiciones iguales y una enseñanza común a la que todos los ciudadanos tienen derecho. A pura banalidad queda reducida la manoseada referencia a la "calidad" y al "esfuerzo" personal,

**Quienes tan obsesionados están en preservar y ampliar su coto privilegiado, poco interés deben tener en la calidad del sector público, de cuya degradación se alimentan.**

si toda la discusión estriba en si son dos o tres las asignaturas suspensas con las que el alumno pueda pasar de curso. En cuanto al profesorado, únicamente los muy despistados y desmemoriados (y los hubo en la famosa manifestación del 12 de noviembre) pueden dar credibilidad a los oportunistas halagos del momento, cuando todas las administraciones han coincidido hasta ahora en el acoso y desprestigio continuado de la función docente, de la pública en particular, con sus secuelas de menosprecio profesional, económico y social.

#### **DEBILIDADES Y RETROCESOS INACEPTABLES**

Al contrario de lo que se nos ha querido transmitir, no había "razones de peso" que atender. Tampoco es verdad que la derecha y los obispos se hayan adueñado de la calle. Se les ha dejado, y no han encontrado la respuesta que cabía esperar. Ellos han jugado su baza. Habiéndoles asegurado el gobierno socialista su buena parte del pastel y mostrado comprensión a sus torticeros argumentos, es normal que, envalentonados, quieran aumentarla e imponer a todos su propia e interesada visión de lo que ha de ser la educación. El problema es que el gobierno, que se muestra tan débil y sensible con las demandas reaccionarias, no puede darles satisfacción sino a costa de relegar los intereses democráticos de la mayoría. Tampoco han tomado la iniciativa de defenderlos las fuerzas políticas y sindicales que, teniendo mayor audiencia y



responsabilidad, han terminado por otorgar un resignado beneplácito a cambio de muy poca cosa. Pensando mal, tal vez era éste el proyecto en mente y, entretenidos con los avatares de una sinuosa negociación "con todos" para lograr el "pacto educativo", nos hemos visto reducidos al papel de meros espectadores de un drama cuyo guión y desenlace estaban previamente trazados.

Nos cabe decir que, como en otros asuntos, aparte del trámite parlamentario que está por finalizar, nada hay definitivamente atado y solucionado con la LOE. Nadie puede predecir los ritmos y formas de resistencia, pero es poco probable que la gente (profesionales de la educación, padres, alumnos, ...) vaya a soportar sin rechistar que, una vez más, le quieran dar gato por liebre. Y en eso ha concluido, de momento, la negociación y el pacto de marras. Los retoques al anteproyecto a su paso por el Congreso, por leves que parezcan, vienen a empeorar el punto de partida y a ratificar, de manera explícita, las bases sobre las que se sustentan las pretensiones más reaccionarias y atentatorias contra la escuela pública. Despejando cualquier ambigüedad del texto anterior, los que se sentaron a negociar con el gobierno y los que le dieron portazo han conseguido que se vean reconocidos y legitimados los principios, contrarios a toda idea democrática, que rigen al sector privado y confesional. Podrá, sin trabas y con más dinero público, seguir seleccionando al alumnado, recoger financiación extra de las familias, blandir el "ideario" como instrumento de discriminación y configurar a voluntad su propia oferta educativa; determinando, en definitiva, el curso general de la enseñanza. Porque son, sobre todo, su filosofía y su proyecto los que se abren paso en el texto de esta ley; por encima de las vacuas apelaciones a derechos, igualdad de condiciones o ideales y valores de la escuela pública, a cuya defensa y fortalecimiento decían acudir los promotores de la nueva reforma.

Difícilmente pueden verse reflejados en esta LOE los millones de ciudadanos que utilizaron su voto para provocar un cambio real de política. El impulso democrático que produjo el cambio de gobierno exigía, y exige, oídos menos proclives a dejarse llevar por la reacción vociferante y más abiertos a las reivindi-

caciones de la mayoría ciudadana. Ya es hora de establecer una separación neta entre la Iglesia (cualquiera que sea la confesión religiosa de las muchas posibles) y el Estado, entre los intereses privados y los públicos. Es ésta una demanda basada en los principios más elementales de la democracia, y no en extemporáneos radicalismos o impacencias inmaduras, como algunos quieren hacernos creer. En los análisis previos y justificativos de la nueva reforma, nadie ponía en duda que desde hace tiempo el papel de cenicienta viene siendo soportado por la enseñanza pública, en cuyo deterioro y acumulación de problemas encuentra la privada el vivero de su crecimiento. Pese a los diversos teatrales desplantes de cara a la galería, el pacto "de hecho", el ofrecido por el gobierno socialista y al que voluntariamente se ha atado, supone un retroceso en la necesaria y urgente reconstrucción de la escuela pública. Democratizar y fortalecer el sistema público de educación no puede traducirse en dar alas a la privatización, en desviar hacia los centros concertados más fondos públicos, en consagrar los mecanismos de fragmentación y segregación, sino, por el contrario, en tomar las medidas precisas para garantizar, de forma efectiva y universal, iguales derechos e iguales condiciones, a fin de que toda la población, independientemente de su posición social y de su nivel económico, pueda ejercerlos los unos y utilizar las otras para el logro del máximo conocimiento.

En ello vamos a seguir empeñados, y a esta urgente empresa llamamos a cuantos profesionales de la enseñanza y simples ciudadanos quieren defender la escuela pública. Quienes dicen tener los mismos objetivos y, sin embargo, están dando, con más o menos "peros", su apoyo al todavía proyecto de ley, aún están a tiempo de rectificar y contribuir a organizar la movilización necesaria para lograr un marco legal que haga posible satisfacer los derechos generales. Invitamos a nuestros lectores a que, a su modo y manera, así se lo hagan llegar a los responsables parlamentarios, políticos y sindicales, que, en lo inmediato, tienen en sus manos el que salga una ley a favor de los menos o a favor de los más. Este texto y su difusión pueden ser un instrumento útil para tal fin.

**Ya es hora de establecer una separación neta entre la Iglesia (cualquiera que sea la confesión religiosa de las muchas posibles) y el Estado, entre los intereses privados y los públicos.**